



**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015** ✓

FECHA

10 de septiembre de 2015 ✓

MIEMBROS

JOSE PAUL AZUERO BERNAL ✓

Delegado del Gobernador (Resolución 585 de 2014)

HERNANDO ALVARADO SERRATO ✓

Director Departamento Administrativo Jurídico

SANDRA XIMENA CALDERON ✓

Secretaria General

BRIGITTE OLARTE CARDOSO ✓

Secretaria de Educación

LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR ✓

Secretario de Hacienda

MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO ✓

Jefe Control Interno de Gestión

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Verificación del quórum.
- 2.- Exposición, análisis y conclusiones del comité frente a las siguientes solicitudes de conciliación prejudicial o judicial para la Procuraduría Judicial y Juzgados o Tribunales:
  - 2.1.- SOFIA MEDINA BENITEZ Y OTROS ✓
  - 2.2.- ISRAEL MANCHOLA MENDEZ ✓
  - 2.3.- ACCION DE REPETICION CASO - BETTY NARVAEZ ALARCON ✓
  - 2.4.- ACCION DE REPETICION CASO - FRANCY EDITH MEDINA ARCOS ✓
  - 2.5.- ACCION DE REPETICION CASO - FERNANDO VARGAS GONZALEZ ✓
  - 2.6.- PEDRO NELSON PERDOMO ✓
  - 2.7.- ACCION DE REPETICION CASO - LAMUS ISRAEL ✓
  - 2.8.- ACCION DE REPETICION CASO - LUIS ARCESIO RIVERA CUELLAR ✓
- 3.-VARIOS
- 4.-RECOMENDACIONES ✓

DESARROLLO





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

Siendo las 2:30 p.m. del 10 de septiembre de 2015 se da inicio al Comité de Conciliación en Sesión Ordinaria, y se procedió a su instalación por parte del delegado del señor Gobernador, Doctor JOSE PAUL AZUERO BERNAL, quien ordenó dar lectura al orden del día, Acto seguido se dio inicio a su desarrollo así:

**1.-Verificación del quórum.**

El presidente del Comité hace el llamado, quien suspende la sesión por cuanto varios miembros del comité no pueden asistir, por lo que fija fecha para reiniciar la presente sesión de comité para las 10 am del día 18 de septiembre de 2015.

Siendo las 10:00 a.m. del 18 de septiembre de 2015, el presidente del Comité pospone la hora de inicio para las 3:00 pm, por lo que el presidente del Comité reinicia a las 3:00 pm del mismo día y hace el llamado, quien constata y manifiesta la existencia del quórum de liberatorio y decisorio para la presente sesión, advierte la ausencia de LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR, por lo tanto ordena continuar el orden del día programado.

**2.- Exposición, análisis y conclusiones del Comité frente a la siguiente solicitud de conciliación prejudicial o judicial para la Procuraduría Judicial y Juzgados o Tribunales, entre otros asuntos:**

**2.1.- ACCION DE REPETICION CASO – SOFIA MEDINA BENITEZ Y OTROS.** ✓

RESPONSABLE DE LA FICHA:	MARIA ANGÉLICA QUINTERO VIEDA
FECHA AUDIENCIA:	Haga clic aquí para escribir una fecha.
AUTORIDAD CONVOCANTE:	DESPACHO JUDICIAL
CONVOCADO:	
CONVOCANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA
MOTIVO DE LA REPETICIÓN:	Pago de los perjuicios infringidos por la muerte del ingeniero JIMENO CAMACHO MEDINA funcionario de la gobernación como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 3 de septiembre de 2002.
FECHA EJECUTORIA DE LA DECISIÓN JUDICIAL O ARBITRAL/DEL AUTO APROBATORIO DE LA CONCILIACIÓN/DE TRANSACCIÓN/DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN:	8 de octubre de 2014
CAPITAL PAGADO:	\$1.091'.113.018
TOTAL INTERESES PAGADOS:	
TOTAL PAGADO POR LA ENTIDAD:	\$1.091'.113.018
FECHA DE PAGO TOTAL:	28 de Abril de 2015





GOBERNACIÓN DEL HUILA  
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

**PRESUNCIONES**

Los señores MARIA TERESA CAMACHO MEDINA, GEMMA PASCUAS PINZON, SOFIA MEDINA BENITEZ DE CAMACHO, NATALIA CAMACHO MEDINA, FERNANDO CAMACHO MEDINA, MARIA AMPARO CAMACHO MEDINA, RODRIGO CAMACHO MEDINA, MERCEDES CAMACHO MEDINA, ANDREA CRISTINA CAMACHO MEDINA, PABLO CAMACHO PASCUAS, ALFONSO CAMACHO MEDINA, ANA MARIA CAMACHO PASCUAS, ESPERANZA CAMACHO MEDINA, OLGA CAMACHO MEDINA presentaron demanda de reparación directa contra EL DEPARTAMENTO DEL HUILA y COOTRADEPH para que se declararan administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios infringidos por la muerte del ingeniero JIMENO CAMACHO MEDINA como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el **3 de septiembre de 2002** en la vía que del municipio de Santa María conduce al municipio de Palermo, la que correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Neiva.

En el proceso referido el día 14 de diciembre de 2011 se profirió sentencia condenando al Departamento del Huila y a COOTRADEPH por considerar que la muerte del señor Jimeno Camacho Medina se produjo en cumplimiento de funciones públicas y como consecuencia de la realización de una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículos automotores, a la que fue sometido el funcionario con el fin de cumplir con el cometido que le fue asignado.

Así mismo, porque el automotor accidentado se encontraba al servicio del Departamento del Huila en virtud del contrato de prestación de servicios N° 019 del 7 de junio de 2002, suscrito entre el Departamento del Huila y COOTRADEPH.

En la providencia en mención se indicó expresamente: ***"Así las cosas, las pruebas recopiladas permiten inferir dentro de la lógica de lo razonable la intervención del Departamento del Huila y la Precooperativa COOTRADEPH en la actividad riesgosa y que causó la muerte del señor JIMENO CAMACHO MEDINA, esto es, quedó demostrado que éste falleció como consecuencia de un accidente de tránsito en el que intervino el vehículo dispuesto por la Precooperativa para el cumplimiento de la comisión que le fuere asignada a la víctima por parte del ente territorial demandada, según contrato N° 019 de 2002, automotor en el que la víctima se desplazaba por orden de sus superiores y en cumplimiento de una actividad propia de sus funciones.(...)"***

***Así pues, las circunstancias que se esgrimieron a lo largo del presente proceso, se dan los presupuestos necesarios para determinar la responsabilidad solidaria de los demandados y***





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

*en consecuencia, la obligatoriedad que tienen de indemnizar el daño irrogado, conforme al postulado del artículo 90 de la Constitución Política. (...).*

La decisión del a-quo fue apelada y confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila Sala Escritural el 12 septiembre de 2014.

Se ha remitido a este despacho copia de la Resolución por la cual se reconoce el pago de dicha condena así como la orden de pago junto con sus soportes para efecto de estudiar si hay lugar o no a ejercer la acción de repetición contra el Secretario de Vías de la época, doctor HERNANDO QUESADA TRUJILLO.

Para dar respuesta al interrogante planteado me sustentaré en las normas que contienen las disposiciones objeto del interrogante bajo las siguientes consideraciones:

El inciso 2o. del artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 678 de 2001, señalan claramente que la responsabilidad personal y patrimonial del agente público sólo se compromete en los casos en que su conducta, que dio lugar al daño antijurídico a un tercero por el cual tuvo que pagar una indemnización el Estado, sea cometida a título de dolo o culpa grave, lo que excluye otras modalidades de culpa, como la leve y levisima, que no generan responsabilidad patrimonial del agente estatal, como ocurre en el régimen civil de responsabilidad.

Ahora bien, ante la inexistencia de una definición legal de los conceptos de dolo o culpa grave, inicialmente el Consejo de Estado en su jurisprudencia recurrió a las definiciones que sobre los mismos trae el artículo 63 del Código Civil, comparando la conducta del agente demandado con la del modelo del buen servidor público con el fin de determinar su responsabilidad; y luego, con un sentido más amplio, acudió a los artículos 6 y 91 de la Constitución Política, que señalan que los servidores públicos son responsables no sólo por infringir la Constitución y las leyes, sino también por extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones, sin que les sea dable oponer el cumplimiento de un mandato superior para eximirse de responsabilidad, cuando, en infracción manifiesta de un precepto constitucional, causen daño o detrimento a una persona. (...).

ante la ausencia de las nociones legales de dolo y culpa grave para efectos de repetición, el legislador en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 consagró la definición de estas dos modalidades de conducta (...) las normas examinadas contemplaron cinco (5) conductas en las cuales se presume el dolo del agente estatal y cuatro (4) en las que se presume la culpa grave, a fin de facilitar su determinación y prueba, en los siguientes términos: a) Se presume que existe dolo por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder. 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento. 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración. 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. 5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

en un proceso judicial. b) Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 2. Carencia o abuso de competencia para proferir decisión anulada, determinada por error inexcusable. 3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable. 4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.

Partiendo de estas premisas y comoquiera que se encuentra debidamente acreditado que el Departamento del Huila pagó la suma de dinero determinada por el juez en la sentencia a cada uno de los demandantes, se pasará a verificar si la actuación del entonces Secretario de Vías del Departamento del Huila para el segundo semestre del año 2002, Dr. HERNANDO QUESADA TRUJILLO es dolosa o gravemente culposa para lo cual es necesario acudir al acervo probatorio, del cual es importante destacar, los siguientes:

En el proceso aparece la resolución No. 125 del 3 de septiembre de 2002 mediante la cual se comisiona al ingeniero JIMENO CAMACHO MEDINA, como jefe de división técnica de la secretaría de vías para que se traslade al municipio de santa maría durante el 3 de septiembre de 2002 para realizar labores de inspección de la vía.

Así mismo, se encuentra el contrato de prestación de servicios N° 019 del 7 de junio de 2002, suscrito entre el Departamento del Huila y COOTRADEPH el cual tenía por objeto la prestación del servicio de transporte para uso exclusivo de los servidores públicos del Departamento dentro y fuera del territorio y el testimonio del Jefe Administrativo de Planeación quien manifiesta que los funcionarios que resultaron muertos debían necesariamente desplazarse por el contratista transportador.

Con las anteriores pruebas el juzgador de instancia concluyó que la muerte del señor Jimeno Camacho Medina se produjo en cumplimiento de funciones públicas y como consecuencia de la realización de una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículos automotores, a la que fue sometido el funcionario con el fin de cumplir con el cometido que le fue asignado determinando en este caso la procedencia de una responsabilidad objetiva por riesgo excepcional.

Ahora bien, pese a que es un hecho cierto que la Secretaria de Vías en cabeza de su secretario permitió y programó el desplazamiento de una comisión de Ingenieros al Municipio de Santa María lugar con el fin de observar el estado de la vía, considero que por este hecho no hay lugar a iniciar acción de repetición en su contra en razón a que el régimen de responsabilidad objetiva por el cual se nos condena de suyo excluye cualquier consideración de tipo subjetivo pues basta con acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación se solicita y el nexo causal con el servicio y para este caso no existió ni causa extraña, ni culpa exclusiva de la víctima, ni el hecho exclusivo de un tercero, ni fuerza mayor para habernos exonerados de esta responsabilidad.





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

Finalmente, considero que el Secretario de Vías actuó dentro de los límites que le imponían sus funciones y competencias y utilizando los medios que le proveía el Departamento para el ejercicio de su labor y la de los funcionarios a su cargo por lo que debe tenerse que el mismo actuó sin culpa ni dolo por lo que mi recomendación es que no hay lugar a la acción de repetición.

NOMBRE DEL AGENTE O EXAGENTE:	
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE O EXAGENTE CC/NIT:	
NUMERO ÚNICO DE RADICACIÓN DEL PROCESO:	
FECHA DE CADUCIDAD:	28 de Abril de 2017

**DECISIÓN:**

Terminada la exposición del apoderado los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO INICIAR ACCION DE REPETICION**, teniendo en cuenta que el régimen de responsabilidad objetiva por el cual se condena al Departamento del Huila de suyo excluye cualquier consideración de tipo subjetivo, pues basta con acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación se solicita y el nexo causal con el servicio y para este caso no existió ni causa extraña, ni culpa exclusiva de la víctima, ni el hecho exclusivo de un tercero, ni fuerza mayor para habernos exonerados de esta responsabilidad. Por lo que no se advierte dolo o culpa grave de agente o ex agente respecto al caso en análisis que determine la procedencia de la acción de repetición de que trata la Ley.

**2.2.- ACCION DE REPETICION CASO – ISRAEL MANCHOLA MENDEZ**

<b>RESPONSABLE DE LA FICHA: MARIA ANGELICA QUINTERO VIEDA</b>	
<b>1. PROCESO ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD</b>	
FECHA AUDIENCIA:	Haga clic aquí para escribir una fecha.
AUTORIDAD CONVOCANTE:	<b>SIN AUTORIDAD CONVOCANTE</b>
CONVOCADO:	<b>NO APLICA</b>
CONVOCANTE:	<b>DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>
MOTIVO DE LA REPETICIÓN:	<b>DECISION JUDICIAL</b>
FECHA EJECUTORIA DE LA DECISIÓN	14 de marzo de 2014





## GOBERNACIÓN DEL HUILA

Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

### Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015

JUDICIAL O ARBITRAL/DEL AUTO APROBATORIO DE LA CONCILIACIÓN/DE TRANSACCIÓN/DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN:	
CAPITAL PAGADO:	\$29.981.864
TOTAL INTERESES PAGADOS:	
TOTAL PAGADO POR LA ENTIDAD:	\$29.981.864
FECHA DE PAGO TOTAL:	24 de marzo de 2015 Esta fecha corresponde al pago realizado según informe de secretaria de hacienda.

#### PRESUNCIONES

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Neiva profirió sentencia condenatoria en contra del Departamento del Huila como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 147 del 5 de abril de 2011 mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de los derechos prestacionales y laborales a la docente ISABEL ROA GARZON, contratada mediante ordenes de prestación de servicios y que laboró en Institución Educativas de la Entidad Territorial Departamento del Huila en algunos periodos de los años 1988 a 1994 en forma interrumpida.

La contratación que se efectuaba para la época de los hechos se fundamenta en las normas de descentralización dictadas para la época de los hechos, tales como la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, artículo 38, y Decreto de Salarios para docentes y directivos docentes del año 2003. El artículo 105 de la Ley 115 de 1994 señala: "A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del artículo 6° de la ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el período académico siguiente hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente territorial".

Así mismo, los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes de prestación de servicios adquirieron por la Ley 715 de 2001 el derecho a ser vinculados provisionalmente con la salvedad de que deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.

En este orden de ideas, el legislador quiso garantizar a los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que venían contratados con órdenes de prestación de servicios una continuidad relativa en la prestación del servicio, para lo cual se facultó nombrarlos provisionalmente, previa acreditación de requisitos, sin que ello significara un ingreso automático al régimen de carrera, pues, como se recuerda, a ella se accedía, en vigencia del decreto 2277 de 1979 mediante nombramiento en propiedad – más escalafón y posesión –, y posteriormente por concurso, según los preceptos de la Ley 29, el decreto 1706 - ambos de 1989 y de la Ley 115 de 1994, artículo 105.

Conforme las disposiciones referidas se tiene que la vinculación de docentes mediante la modalidad de OPS o contrato de prestación de servicios era autorizada por la normatividad, lo que dio lugar a la contratación de los docentes a cargo del departamento, y pagados por el situado





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

fiscal recursos del sistema general de participaciones, y excepcionalmente con recursos propios, durante algunos periodos de los años ya enunciados, por tanto su vinculación de carácter contractual se sometió a la Ley 80 de 1993, o en su defecto a la ley 715 de 2001, según el caso.

No obstante el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y los distintos Despachos judiciales de carácter administrativo han decidido amparados en el principio constitucional de igualdad, realidad sobre la formalidad, que estas vinculaciones contractuales para la prestación de servicio docente cubren una verdadera relación laboral, por tanto declaran la nulidad de los actos administrativos, que niegan el reconocimiento y pago de prestaciones sociales declarando una relación laboral.

Conforme lo anterior, no se colige presunción de dolo o culpa grave de quienes suscribieron los contratos de prestación de servicio, como tampoco de quien negó la petición de los demandantes, toda vez que el Gobernador de la época se atuvo a la normatividad que amparaba la contratación con docentes, para los años 1986 a 2003, toda vez que el personal que venía vinculado por contrato de prestación de servicios fue nombrado provisionalmente en la planta de docentes del Departamento del Huila. Teniendo en cuenta lo expuesto recomiendo no iniciar acción de repetición en contra del gobernador correspondiente al periodo electoral o a cualquier otro funcionario que haya podido tener incidencia en los actos administrativos de reconocimiento o negación del derecho para la declaratoria de la relación laboral.

NOMBRE DEL AGENTE O EXAGENTE:	GOBERNADOR DEL HUILA Y/O SECRETARIO DE EDUCACION
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE O EXAGENTE CC/NIT:	
NUMERO ÚNICO DE RADICACIÓN DEL PROCESO:	
FECHA DE CADUCIDAD:	24 de Septiembre de 2015

**DECISIÓN:**

Terminada la exposición del apoderado los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO INICIAR ACCION DE REPETICION**, teniendo en cuenta que no se colige presunción de dolo o culpa grave de quienes suscribieron los contratos de prestación de servicio, como tampoco de quien negó la petición de los demandantes, toda vez que el Gobernador de la época se atuvo a la normatividad que amparaba la contratación con docentes, para los años 1986 a 2003, toda vez que el personal que venía vinculado por contrato de prestación de servicios fue nombrado provisionalmente en la planta de docentes del Departamento del Huila. ✓

**2.3.- ACCION DE REPETICION – CASO BETTY NARVAEZ**





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

<b>RESPONSABLE DE LA FICHA: MARILIN CONDE GARZON</b>	
<b>1. PROCESO ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD</b>	
FECHA AUDIENCIA:	Haga clic aquí para escribir una fecha.
AUTORIDAD CONVOCANTE:	<b>SIN AUTORIDAD CONVOCANTE</b>
CONVOCADO:	<b>NO APLICA</b>
CONVOCANTE:	<b>NO APLICA</b>
MOTIVO DE LA REPETICIÓN:	<b>DECISION JUDICIAL SOBRE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS CON DOCENTES-DECLARATORIA CONTRATO REALIDAD</b>
FECHA EJECUTORIA DE LA DECISIÓN JUDICIAL O ARBITRAL/DEL AUTO APROBATORIO DE LA CONCILIACIÓN/DE TRANSACCIÓN/DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN:	<b>08 de julio de 2014</b>
CAPITAL PAGADO:	<b>\$ 14.729.057 se pagó el 22 de octubre/2014 y \$4.372.173 del 04 de marzo de 2015</b>
TOTAL INTERESES PAGADOS:	<b>INDEXACION \$9.510.441</b>
TOTAL PAGADO POR LA ENTIDAD:	<b>\$ 19.101.230</b>
FECHA DE PAGO TOTAL:	<b>04 de marzo de 2015</b>





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

**PRESUNCIONES**

Mediante proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho la señora BETTY NARVAEZ ALARCON, en calidad de demandante pretendía el reconocimiento de una relación laboral y consecuente reconocimiento y pago de prestaciones sociales dejadas de percibir por el tiempo en que la demandante se desempeñó como educadora para los años 1995, 1996, 1997, 1998, cuya liquidación se debía tomarse con base del salario que devengaba otro funcionario en un cargo equivalente, o el valor de los honorarios pactados en los respectivos contratos u órdenes de prestación de servicios.

El planteamiento de defensa se fundamentó en la PRESCRIPCIÓN, INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL, teniendo en cuenta que en el caso de la prescripción la demandante acudió a reclamar la declaratoria de relación laboral pasado tres años de haberse terminado su última vinculación contractual, de igual manera el artículo 38 de la Ley 715 de 2001 autorizó la celebración de contratos de prestación con docentes. Los Decretos de Salarios de docentes y directivos de docentes no contemplaban el reconocimiento de prestaciones sociales.

Frente a las pretensiones anteriores, quedó probado que la docente prestó sus servicios al Departamento del Huila como docente a través de los contratos 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2003, y que durante dicho tiempo la docente desempeñó las labores de un docente de la planta, cumpliéndose los tres elementos de la relación laboral: prestación personal del servicio, continuada subordinación y remuneración como contraprestación del servicio.

La Juez infiere que el Departamento del Huila, pretendió evadir el pago de prestaciones sociales encubriendo la existencia de una verdadera relación laboral, dado que la subordinación y la dependencia se encuentran ínsitas.

El Juez Contencioso Administrativo de Descongestión en primera y segunda instancia insistió en no declarar la prescripción y condenaron al Departamento del Huila al pago de todas las prestaciones sociales. Mediante Resolución No. 498 del 22 de octubre de 2014, el Departamento del Huila procedió a efectuar el reconocimiento y pago por la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$14.729.057), por concepto de dotación, auxilio de transporte, prima de alimentación, prima de navidad, cesantía e intereses, aportes a salud y a la correspondiente indexación.

Contra dicho acto administrativo, y mediante escrito PQR2142 del 25 de noviembre de 2014, la apoderada en el proceso, interpone recurso de reposición y en subsidio apelación frente a la resolución No. 498 del 22 de octubre de 2014, porque no se liquidó los valores correspondientes a PRIMA DE VACACIONES del año 1997, en la liquidación total, y también solicitó el pago de intereses moratorios. La Secretaría de Hacienda encontró fundamentada la petición y reconoció mediante Resolución No. 058 del 18 de febrero de 2015 la suma de \$4.372.173, para un total de \$19.101.230, 00 suma que se ordenó pagar el 4 de marzo de 2015.





## GOBERNACIÓN DEL HUILA

### Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

#### Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015

La contratación que se efectuaba para la época de los hechos se fundamenta en las normas de descentralización dictadas para la época de los hechos, tales como la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, artículo 38, y Decreto de Salarios para docentes y directivos docentes del año 2003. El artículo 105 de la Ley 115 de 1994 señala: "A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del artículo 6° de la ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el período académico siguiente hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente territorial".

Así mismo, los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes de prestación de servicios adquirieron por la Ley 715 de 2001 el derecho a ser vinculados provisionalmente con la salvedad de que deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.

En este orden de ideas, el legislador quiso garantizar a los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que venían contratados con órdenes de prestación de servicios una continuidad relativa en la prestación del servicio, para lo cual se facultó nombrarlos provisionalmente, previa acreditación de requisitos, sin que ello significara un ingreso automático al régimen de carrera, pues, como se recuerda, a ella se accedía, en vigencia del decreto 2277 de 1979 mediante nombramiento en propiedad – mas escalafón y posesión –, y posteriormente por concurso, según los preceptos de la Ley 29, el decreto 1706 - ambos de 1989 y de la ley 115 de 1994, artículo 105.

Conforme las disposiciones referidas se tiene que la vinculación de docentes mediante la modalidad de OPS o contrato de prestación de servicios era autorizada por las normatividad, lo que dio lugar a la contratación de la demandante durante algunos periodos de los años. 1996. 1997, 1998, 1999, 2000. 2001, 2002, por tanto su vinculación de carácter contractual se sometió a la Ley 80 de 1993.

No obstante el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y los distintos Despachos judiciales de carácter administrativo han decidido amparados en el principio constitucional de igualdad, realidad sobre la formalidad, consideran que estas vinculaciones contractuales para la prestación de servicio docente cubren una verdadera relación laboral, por tanto deciden la nulidad de los actos administrativos a que hemos hecho referencia, declaran una relación laboral y ordenan el pago de prestaciones sociales teniendo en cuenta los honorarios recibidos, que en ningún momento puede ser inferior al salario que devengaba un docente en el escalafón respectivo.

Conforme lo anterior, no se colige presunción de dolo o culpa grave de quienes suscribieron los contratos de prestación de servicio, como tampoco de quienes negaron las peticiones de los señores arriba enunciados, toda vez que los mandatarios de turno se atuvieron a la normatividad que amparaba la contratación con docentes, para los años 1994 a 2003, toda vez que el personal que venía vinculado por contrato de prestación de servicios fue nombrado provisionalmente en la planta de docentes del Departamento del Huila. Teniendo en cuenta lo expuesto recomiendo no iniciar acción de repetición en contra del Dr. LUIS JORGE PAJARITO SANCHEZ

Página 11





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

NOMBRE DEL AGENTE O EXAGENTE:	LUIS JORGE PAJARITO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE O EXAGENTE CC/NIT:	12.135.643
NUMERO ÚNICO DE RADICACIÓN DEL PROCESO:	41001-33-31-703-2012-00072-00
FECHA DE CADUCIDAD:	03 de marzo de 2017

**DECISIÓN:**

Terminada la exposición del apoderado los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO INICIAR ACCION DE REPETICION** teniendo en cuenta que no se colige presunción de dolo o culpa grave de quienes suscribieron los contratos de prestación de servicio, como tampoco de quienes negaron las peticiones de los señores arriba enunciados, toda vez que los mandatarios de turno se atuvieron a la normatividad que amparaba la contratación con docentes, para los años 1994 a 2003, toda vez que el personal que venía vinculado por contrato de prestación de servicios fue nombrado provisionalmente en la planta de docentes del Departamento del Huila.

**2.4.- ACCION DE REPETICION CASO – FRANCY EDITH MEDINA ARCOS**

<b>RESPONSABLE DE LA FICHA: MARILIN CONDE GARZON</b>	
<b>1. PROCESO ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD</b>	
FECHA AUDIENCIA:	Haga clic aquí para escribir una fecha.
AUTORIDAD CONVOCANTE:	<b>SIN AUTORIDAD CONVOCANTE</b>
CONVOCADO:	<b>NO APLICA</b>
CONVOCANTE:	<b>NO APLICA</b>
MOTIVO DE LA REPETICIÓN:	DECISION JUDICIAL SOBRE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS CON DOCENTES- DECLARATORIA CONTRATO REALIDAD
FECHA EJECUTORIA DE LA	08 de julio de 2014





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

DECISIÓN JUDICIAL O ARBITRAL/DEL AUTO APROBATORIO DE LA CONCILIACIÓN/DE TRANSACCIÓN/DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN:	
CAPITAL PAGADO:	\$ 23.783.630 se pagó en nov/2014 y \$12.538.639 el 04 de marzo de 2015
TOTAL INTERESES PAGADOS:	INDEXACION- \$9.510.441+\$4.204.000
TOTAL PAGADO POR LA ENTIDAD:	\$ 36.322.269
FECHA DE PAGO TOTAL:	04 de marzo de 2015

**PRESUNCIONES**

Mediante proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho la señora FRANCY EDITH MEDINA ARCOS , en calidad de demandante pretendía el reconocimiento de una relación laboral y consecuente reconocimiento y pago de prestaciones sociales dejadas de percibir por el tiempo en que la demandante se desempeñó como educadora para los años 1996,1997, 1998, 1999 , 2000 y 2003, cuya liquidación se debía tomarse con base del salario que devengaba otro funcionario en un cargo equivalente, o el valor de los honorarios pactados en los respectivos contratos u órdenes de prestación de servicios.

El planteamiento de defensa se fundamentó en la PRESCRIPCIÓN, INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL, teniendo en cuenta que en el caso de la prescripción la demandante acudió a reclamar la declaratoria de relación laboral pasado tres años de haberse terminado su última vinculación contractual, de igual manera el artículo 38 de la Ley 715 de 2001 autorizó la celebración de contratos de prestación con docentes. Los Decretos de Salarios de docentes y directivos de docentes no contemplaban el reconocimiento de prestaciones sociales.

Frente a las pretensiones anteriores, quedó probado que la docente prestó sus servicios al Departamento del Huila como docente a través de los contratos 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2003, y que durante dicho tiempo la docente desempeñó las labores de un docente de la planta , cumpliéndose los tres elementos de la relación laboral: prestación personal del servicio, continuada subordinación y remuneración como contraprestación del servicio.

La Juez infiere que el Departamento del Huila, pretendió evadir el pago de prestaciones sociales encubriendo la existencia de una verdadera relación laboral, dado que la subordinación y la dependencia se encuentran ínsitas.





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

El Juez Contencioso Administrativo de Descongestión en primera y segunda instancia insistió en no declarar la prescripción y condenaron al Departamento del Huila al pago de todas las prestaciones sociales. Mediante Resolución No. 497 del 22 de octubre de 2014, el Departamento del Huila procedió a efectuar el reconocimiento y pago por la suma de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (\$23.783.630), por concepto de dotación, auxilio de transporte, prima de alimentación, prima de navidad, cesantía e intereses, aportes a salud y a la correspondiente indexación.

Contra dicho acto administrativo, y mediante escrito PQR21426 del 25 de noviembre de 2014, la apoderada en el proceso, interpone recurso de reposición y en subsidio apelación frente a la resolución No. 497 del 22 de octubre de 2014, porque no se liquidó los valores correspondientes a PRIMA DE VACACIONES del año 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 en la liquidación total, y también solicitó el pago de intereses moratorios. La Secretaría de Hacienda encontró fundamentada la petición y reconoció mediante Resolución No. 059 de 2015 la suma de \$23.783.630, para un total de \$36.322.269, suma que se ordenó pagar el 4 de marzo de 2015.

La contratación que se efectuaba para la época de los hechos se fundamenta en las normas de descentralización dictadas para la época de los hechos, tales como la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, artículo 38, y Decreto de Salarios para docentes y directivos docentes del año 2003. El artículo 105 de la Ley 115 de 1994 señala: "A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del artículo 6° de la ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el período académico siguiente hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente territorial".

Así mismo, los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes de prestación de servicios adquirieron por la Ley 715 de 2001 el derecho a ser vinculados provisionalmente con la salvedad de que deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.

En este orden de ideas, el legislador quiso garantizar a los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que venían contratados con órdenes de prestación de servicios una continuidad relativa en la prestación del servicio, para lo cual se facultó nombrarlos provisionalmente, previa acreditación de requisitos, sin que ello significara un ingreso automático al régimen de carrera, pues, como se recuerda, a ella se accedía, en vigencia del decreto 2277 de 1979 mediante nombramiento en propiedad – mas escalafón y posesión –, y posteriormente por concurso, según los preceptos de la Ley 29, el decreto 1706 - ambos de 1989 y de la ley 115 de 1994, artículo 105.

Conforme las disposiciones referidas se tiene que la vinculación de docentes mediante la modalidad de OPS o contrato de prestación de servicios era autorizada por la normatividad, lo que dio lugar a la contratación de la demandante durante algunos periodos de los años. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, por tanto su vinculación de carácter contractual se sometió a la Ley 80 de 1993.





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

No obstante el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y los distintos Despachos judiciales de carácter administrativo han decidido amparados en el principio constitucional de igualdad, realidad sobre la formalidad, consideran que estas vinculaciones contractuales para la prestación de servicio docente cubren una verdadera relación laboral, por tanto deciden la nulidad de los actos administrativos a que hemos hecho referencia, declaran una relación laboral y ordenan el pago de prestaciones sociales teniendo en cuenta los honorarios recibidos, que en ningún momento puede ser inferior al salario que devengaba un docente en el escalafón respectivo.

Conforme lo anterior, no se colige presunción de dolo o culpa grave de quienes suscribieron los contratos de prestación de servicio, como tampoco de quienes negaron las peticiones de los señores arriba enunciados, toda vez que los mandatarios de turno se atuvieron a la normatividad que amparaba la contratación con docentes, para los años 1994 a 2003, toda vez que el personal que venía vinculado por contrato de prestación de servicios fue nombrado provisionalmente en la planta de docentes del Departamento del Huila. Teniendo en cuenta lo expuesto recomiendo no iniciar acción de repetición en contra del Dr. LUIS JORGE PAJARITO SANCHEZ

NOMBRE DEL AGENTE O EXAGENTE:	LUIS JORGE PAJARITO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE O EXAGENTE CC/NIT:	12.135.643
NUMERO ÚNICO DE RADICACIÓN DEL PROCESO:	41001-33-31-703-2012-00072-00
FECHA DE CADUCIDAD:	03 de marzo de 2016

**DECISIÓN:**

Terminada la exposición del apoderado los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO INICIAR ACCION DE REPETICION** teniendo en cuenta que no se colige presunción de dolo o culpa grave de quienes suscribieron los contratos de prestación de servicio, como tampoco de quienes negaron las peticiones de los señores arriba enunciados, toda vez que los mandatarios de turno se atuvieron a la normatividad que amparaba la contratación con docentes, para los años 1994 a 2003, toda vez que el personal que venía vinculado por contrato de prestación de servicios fue nombrado provisionalmente en la planta de docentes del Departamento del Huila.

**2.5.- ACCION DE REPETICION CASO – FERNANDO VARGAS GONZALEZ**





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

<b>RESPONSABLE DE LA FICHA: MARILIN CONDE GARZON</b>	
<b>1. PROCESO ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD</b>	
FECHA AUDIENCIA:	Haga clic aquí para escribir una fecha.
AUTORIDAD CONVOCANTE:	<b>SIN AUTORIDAD CONVOCANTE</b>
CONVOCADO:	NO APLICA
CONVOCANTE:	NO APLICA
MOTIVO DE LA REPETICIÓN:	DECISION JUDICIAL – reparación directa FALLA DE SERVICIO FALTA DE SEÑALIZACION MANTENIMIENTO DE LA VIA
FECHA EJECUTORIA DE LA DECISIÓN JUDICIAL O ARBITRAL/DEL AUTO APROBATORIO DE LA CONCILIACIÓN/DE TRANSACCIÓN/DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN:	29 de septiembre de 2014
CAPITAL PAGADO:	\$45.614.731
TOTAL INTERESES PAGADOS:	\$4.650.590
TOTAL PAGADO POR LA ENTIDAD:	\$45.614.731
FECHA DE PAGO TOTAL:	19 de febrero de 2015

**PRESUNCIONES**

La condena contra el Departamento del Huila surge de la acción de reparación directa que instaura el señor FERNANDO VARGAS GONZALEZ contra EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, con el objeto de obtener los perjuicios materiales causados en la modalidad de daño emergente y lucro cesante por la pérdida total del camión de servicio público de su propiedad afiliado a Transportes Osper Ltda con capacidad de siete toneladas dedicado a las labores del transporte de carga cuando el 10 de abril de 2005 sufrió daños en todas sus partes tras deslizarse por un abismo luego de que el mencionado demandante intentara pasarlo por la vía que desde hacía varios días se encontraba obstaculizada por un talud de tierra , según el informe del accidente que obra en el expediente , sin señalización y marcación que diera aviso de la presencia del mismo.

Quedó acreditado que ante el volcamiento del referido vehículo, el accionante incurrió en unos gastos tanto para la extracción del vehículo del abismo donde se precipitó, como la reparación y puesta en funcionamiento del mismo.

Los hechos que originaron la condena: Para EL Juez de Primera y Segunda Instancia el daño es imputable al Departamento del Huila por la omisión de no colocar señales preventivas que advirtieran sobre el riesgo que para la época de los hechos se presentaba sobre la vía que del municipio de Saladoblanco conduce al municipio de Oporapa, debido a la presencia de un talud de tierra que según la inspección judicial anticipada y los testimonios recaudados tenía una





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

antigüedad superior a dos meses y ocupaba casi dos tercios del ancho de la vía. Además que en las pruebas que obran en el expediente dan certeza de que la Secretaría de Vías e Infraestructura de la Gobernación del Huila, al dirigirse mediante oficio fechado 30 de diciembre de 2004 al representante legal de COOTRASANMIGAUEL LTDA, uno de los contratistas que realizaron obras de mantenimiento vial sobre las vías que del municipio de Pitalito conducen a los municipios de Saladoblanco y Oporapa, tenía conocimiento de la emergencia vial causada por la fuerte invernal que había afectado al Departamento del Huila, por lo cual la Secretaría ordenó la ejecución de obras tendientes a restablecer el tránsito vehicular, tanto es así que obra informe suscrito por PRESERHUILA LTDA del 07 de junio de 2005 a la aludida Secretaría informe de las labores realizadas consistentes en el despeje de derrumbes en la vía Pitalito-Acevedo y Pitalito Oporapa, evacuando 1.800 metros cúbicos de material común y conglomerado que debido a la fuerte ola invernal imperante en esa zonal se encontraba taponando las vías, labores que fueron desarrolladas entre el 19 de mayo al 1° de junio de 2005, es decir un mes después del accidente. Conforme lo anterior la conclusión del operador judicial que el Departamento del Huila siempre tuvo conocimiento de las consecuencias viales que para esa época arrojó la fuerte ola invernal que aquejaba la zona, además según los distintos contratos de obra al parecer fueron constantes las fallas en esas vías posiblemente se trataba de un terreno caracterizado por ser permeable, lo que de contera conlleva a expresar que el fenómeno motivo de emergencia vial no fue intempestivo sino paulatino, máxime si desde el 2001 se venía realizando obras de mantenimiento y remoción de taludes, es evidente que el Departamento del Huila falló en la vigilancia de todas las vías que se pudieron afectar con la presencia del invierno, lo cual hacía previsible la obstrucción en cualquier vía de la Zona afectada, pues el Departamento del Huila no podía soportar su defensa en que desconocía el talud que obstruía la vía porque tenía bien sabido que el agua lluvia estaba creando estas afectaciones en esa zona de tiempo atrás, entonces la falla no solo consistió en la ausencia de señalización o de algún tipo de advertencia, sino en la falta de inspección y vigilancia de las vías que podían afectarse para haber tomado las medidas necesarias no tanto para solucionar el problema sino para tratar de minimizar los riesgos consecuente perjuicios que se pudieron haber causado como ahora se reclaman, situación como se expuso anteriormente solo vino a ocurrir con posterioridad a la ocurrencia del accidente.

En la contestación de la demanda y durante todo el proceso se pudo demostrar que había una vía alterna OPORAPA-SAN ROQUE QUITURO. EL VISO –ruta 45 Vía Nacional –Pitalito y que el accionante al ser transportador debía conocerla y ante el obstáculo proceder a transitar por ella, situación que fue tenida en segunda instancia como una concurrencia de culpas, y por ello la condena se modificó, reduciéndose a un 40%.

Los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 contemplan:

*"Dolo.* La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

1. Obrar con desviación de poder.
2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.
3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.
4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.
5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 374 de 2002

*Culpa grave.* La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.
4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. **Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-455 de 2002**

Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 374 de 2002"

Al examinar las pruebas que pudieran presentarse en el eventual proceso de repetición para demostrar el dolo o culpa grave, debemos estudiar si la falta de inspección y vigilancia de la vía o la falta de advertir el talud de tierra que obstruía la vía constituye una omisión sin excusa de la Secretaría de Vías e Infraestructura, sin embargo de las pruebas que obran en el expediente y los contratos de intervención de la vía Saladoblanco-Oporapa donde ocurrió el accidente, durante los años 2004, 2005, se colige que hubo atención en dicha vía, además que para el primer semestre del año 2005 se presentó ola invernal en el Departamento del Huila, dando lugar a múltiples derrumbes que debieron ser retirados en junio de 2005, aunque quedo convencido el operador Judicial que el derrumbe llevaba más de un mes, no aparece registro alguno o prueba que la Secretaría de Vías conociera de la existencia del talud que obstruía la vía y que originó el accidente, por lo que considero que la omisión no es injustificada, dado que exista circunstancias y además pruebas documentales que están en el expediente y en el archivo del Departamento del Huila, me refiero a la ola invernal, a los contratos celebrados y en ejecución en abril de 2005 que justifica la actuación y funciones de la Secretaría de Vías e Infraestructura.

No se encuentra ningún documento, o material probatorio que evidencie la omisión injustificada de la Secretaría de Vías e Infraestructura para la época de los hechos, Dra. Deicy Martina Cabrera,

*[Firma]*





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

que se adecúe a los supuestos fácticos de culpa grave o dolo , cuyas presunciones se contemplan a partir de la Ley 678 de 2001 , en sus artículos 5° y 6°.

Cuando se demanda por vía de repetición, la Entidad actora tiene la carga de demostrar, en forma fehaciente, que la condena en su contra y, por ende, el pago que efectúa, tuvieron como causa la actuación dolosa o gravemente culposa del servidor, toda vez que sobre éste recae la presunción de inocencia.

Así las cosas, en criterio de esta funcionaria, las pruebas documentales allegadas al proceso, así como las testimoniales y pericial no permiten calificar como dolosa o gravemente culposa la conducta de la Dra. Deicy Martina Cabrera Ochoa Teniendo en cuenta lo expuesto recomiendo no iniciar acción de repetición.

NOMBRE DEL AGENTE O EXAGENTE:	DEICY MARTINA CABRERA OCHOA
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE O EXAGENTE CC/NIT:	55.154.211
NUMERO ÚNICO DE RADICACIÓN DEL PROCESO:	41 001 33 31 001  2007 00115 01
FECHA DE CADUCIDAD:	20 de febrero de 2017

**DECISIÓN:**

Terminada la exposición del apoderado los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO INICIAR ACCION DE REPETICION** teniendo en cuenta que de las pruebas documentales allegadas al proceso, así como las testimoniales y pericial no permiten calificar como dolosa o gravemente culposa la conducta de la Dra. Deicy Martina Cabrera Ochoa.

**2.6.- PEDRO NELSON PERDOMO** ✓

<b>RESPONSABLE DE LA FICHA: MARTHA CECILIA CASTRO ORTIZ</b>	
<b>1. REFERENCIA</b>	
FECHA AUDIENCIA:	10 de septiembre de 2013
CONVOCANTE:	PEDRO NELSON PERDOMO
CONVOCADO:	DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONCILIACIÓN ENTRE ENTIDADES ESTATALES O PARTICULARES:	CONFLICTO CON PARTICULARES
PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD:	CONVOCADO PRINCIPAL





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

TIPO SOLICITUD ANALIZADA POR EL COMITÉ:	JUDICIAL
AUTORIDAD CONVOCANTE:	DESPACHO JUDICIAL
PRINCIPAL MOTIVO DE LA SOLICITUD:	ACTOS ADM.CON VIOLACIÓN MANIFIESTA E INEXCUSABLE DE LAS NORMAS DE DERECHO
CAUSA NO ENLISTADA –OTRAS (En el punto anterior si selecciona OTROS ACTOS ADTIVOS especificar la causa.	
MEDIO DE CONTROL JUDICIAL:	CONTENCIOSA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
VALOR TOTAL DE LAS PRETENSIONES O DE LA CONDENA:	20.637.970.26.oo

**HECHOS**

El señor PEDRO NELSON PERDOMO POLO, MEDIANTE PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SOLICITA SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO Administrativo precontractual contenido en la Resolución No.150 del 3 de octubre de 2005, con el cual se adjudicó el procedimiento precontractual contratación directa No. SVCDPOPO 060-2005, cuyo objeto es la Remoción y Colocación de cercas laterales al corredor vial de acceso al puente EL JUNCAL por la ruta 45 de la interconexión vial, proceso adelantado por la Gobernación del Huila a través de la Secretaria de Vías e infraestructura del Departamento del Huila, doctora DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA, quien determino adjudicar y la suscripción del contrato con el Ingeniero FELIX ALBERTO CAJIAO MUÑOZ.

Solicita que como Restablecimiento del derecho se condene al Departamento del Huila a reconocer y pagar los perjuicios de todo orden, la perdida de oportunidad, la disminución patrimonial que haya sufrido el AIU, ya que la administración la efectuaba el ingeniero PEDRO NELSON PEROMO POLO, la utilidad que había previsto y/o ganancia, reajustes, beneficio o provecho dejado de percibir y good will, incluyendo el daño emergente, lucro cesante y los intereses moratorios a la tasa más alta lealmente permitida de conformidad con el artículo 884 del código del comercio y el artículo 65 de la ley 45 de 1990, conforme a la certificación que para el efecto expida Superintendencia Bancaria, por la adjudicación de Contratación directa No. SVCDPOPO 060-2005, cuyo objeto es la REMOCIION Y COLOCACION DE CERCAS LATERALES AL CORREDOR VIAL DE ACCESO AL PUENTE EL JUNCAL PORLA RUTA 45 DE LA INTERCONEXION VIAL, no obstante que desde el punto de vista legal y comercial, la mejor propuesta y primer orden de calificación o elegibilidad era el presentado por el señor PEDRO NELSON PERDOMO POLO.Y OTRAS PRETENSIONES.





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

Fundamenta sus peticione en que El Departamento del Huila, realizo la invitación vía web a la contratación directa No.060-2005, para la remoción y colocación de cercas laterales al corredor vial de acceso al puente el juncal por la ruta 45 de la interconexión vial.

Mediante la Resolución No.128 del 9 de septiembre 2005 y de conformidad con la ley 80 de 1993, el gobernador de Huila ordeno la apertura de la invitación publica SVCDPOPO 60 de 2005, con el fin de adjudicar el contrato para realizar a todo costo la Remoción y colocación de cercas laterales al corredor vial de acceso al puente

Para dicha adjudicación fueron inscritos y admitidos siete participantes. En la audiencia de sorteo celebrada el 12 de septiembre de 2005, el señor Perdomo Polo resulto seleccionado dentro delos posibles oferentes para presentar dentro del cronograma establecido, la propuesta pertinente para su evaluación correspondiente. Su propuesta resulto admisible en las evaluaciones jurídicas técnica y financiera, con la observación de que debería entregar el certificado de antecedentes según los recibos que adjunto, dentro del término establecidos para realizar las observaciones del informe, contrario sensu, sería rechazada.

En la evaluación económica, calendada del23 de septiembre de 2005, el demandante obtuvo una calificación ACEPTABLE, en sus tres etapas y puntaje de 20 puntos en la cuarta etapa.

Mediante oficio del 27 de septiembre de 2005, el Ing. PEDRO NELSON, remite el certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la procuraduría general de la Nación el 23 de septiembre de 2005, para que sea anexado a su propuesta dentro del proceso de contratación directa No.SVCDOP060 -2005

El comité evaluador presento el 30 de septiembre de 2005, la respuesta a las observaciones recibidas por los proponentes, dentro de los cuales, señalo que el certificado de antecedentes disciplinarios entregado por el proponente PEDRO NELSON PERDOMO, presentaba fecha de expedición superior a la de cierre del proceso, con lo que se demostraba que el oferente no cumplió con el requisito para la presentación de su propuesta.

Finalmente, por conducto de la Resolución No.150 de 2005 del 3 de octubre de 2005, el gobernador del Huila, adjudico la invitación publica No.SVCDPOPO60.

**ANÁLISIS REALIZADO POR MARTHA CECILIA CASTRO ORTIZ**

En sentencia del 30 de junio de 2015, el Juzgado segundo administrativo de descongestión del circuito, decide declarar la nulidad de la Resolución No.150 del 3 de octubre de 2005, a través de la cual el Departamento del Huila, adjudico la invitación pública SVCDPOPO60 al ingeniero Felix Alberto Cajiao Muñoz.





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

Condenar en abstracto al departamento del Huila, ordenándosele para ello establecer el quantum de los perjuicios materiales a través del incidente de liquidación de perjuicios, el cual se realizara en cumplimiento de las reglas señaladas en esta providencia.

**RECOMENDACIÓN**

El Departamento apelo la decisión, pero de acuerdo al análisis efectuado con el Director Jurídico, consideramos que las posibilidades de prosperidad del recurso son mínimas, como quiera que el requisito exigido por el que descalificaron la propuesta del demandante, era de aquellos que podían subsanarse. Considero salvo mejor concepto del Comité de conciliación, que lo más viable es que se concilie. Para ello se solicitó una liquidación al apoderado del señor Pedro Nelson Perdomo Polo, la que fue allegada por la suma de \$20.637.970.26 que pongo a consideración del Comité.

**DECISIÓN:**

Terminada la exposición del apoderado los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **CONCILIAR** teniendo en cuenta que, el requisito exigido por el que descalificaron la propuesta del demandante, era de aquellos que podían subsanarse.

**VALOR A CONCILIAR**

El Departamento del Huila pagará a los demandantes la única suma de hasta VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$20.637.970.00), sin intereses, ni indexación, ni ninguna otra adición al presente valor, dentro de los dos meses siguientes a la aprobación por el señor juez de la presente formula de conciliación, previa presentación de los demandantes de la solicitud de pago, cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad para dicho fin. ✓

**AUTORIZACION**

Los miembros del Comité **AUTORIZAN** a la doctora MARTHA CECILIA CASTRO identificada con la cedula de ciudadanía 36.272.972 de Pitalito Huila, apoderada del Departamento del Huila, para que realice ofrecimiento desde el 70% de la suma máxima a conciliar relacionada en el acápite anterior. ✓

**ARGUMENTOS COMITÉ:**





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

Sl. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto SI, "CERTEZA DE LOS DERECHOS SOLICITADOS."

**2.7.- ACCION DE REPETICION CASO – LAMUS ISRAEL**

<b>RESPONSABLE DE LA FICHA: Martha Cecilia castro Ortiz</b>	
<b>1. PROCESO ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD</b>	
FECHA AUDIENCIA:	Haga clic aquí para escribir una fecha.
AUTORIDAD CONVOCANTE:	<b>SIN AUTORIDAD CONVOCANTE</b>
CONVOCADO:	Por determinar por el Comité
CONVOCANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA
MOTIVO DE LA REPETICIÓN:	SENTENCIA JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO
FECHA EJECUTORIA DE LA DECISIÓN JUDICIAL O ARBITRAL/DEL AUTO APROBATORIO DE LA CONCILIACIÓN/DE TRANSACCIÓN/DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN:	13 de agosto de 2014
CAPITAL PAGADO:	\$4.592044
TOTAL INTERESES PAGADOS:	
TOTAL PAGADO POR LA ENTIDAD:	
FECHA DE PAGO TOTAL:	19 de febrero de 2015

**PRESUNCIONES**

Israel Lamus, promueve acción de reparación directa contra el Departamento del Huila, en aras de obtener sentencia que declare al demandado administrativamente responsable de los perjuicio materiales y morales causados por el decomiso o detención irregular e ilegal de 871 cajas de aguardiente doble anís de 750 c.c., es decir, la cantidad de 10.452 botellas por 850 c.c., efectuado por el servicio de resguardo del departamento el día 2 de septiembre de 1992., mercancía de su propiedad de destinación y explotación comercial.

Como consecuencia de lo pretendido, EL Tribunal administrativo del Huila, Sala primera de decisión falla declarando administrativamente responsable al DEPARTAMENTO DE HUILA por el decomiso de ochocientos setena y un cajas de aguardiente doble anís de propiedad del señor Israel Lamus Ruiz practicado por el resguardo departamental de rentas el día 2 de septiembre de 1992.

Como consecuencia de la anterior declaración, se condena al departamento a pagar a título de indemnización por concepto de daño emergente, en la modalidad de lucro cesante, el valor de \$6.712.140.816.





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

Sentencia que fue apelada por el departamento en el año 2004, y el Consejo de Estado, en sala de lo contencioso administrativo –sección tercero subsección A – Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón dispone modificar la sentencia del Tribunal y en el artículo primero declara administrativamente responsable al departamento del Huila, pro el decomiso de ochocientos setenta y un cajas de aguardiente y en segundo término condenar al departamento a pagar a título de indemnización por concepto de perjuicios materiales el valor de \$4.592.044.00

Deniega las demás pretensiones de la demanda y no condena en costas.

En el acápite de condena en costas, dice: "Como quiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

**PARA EFECTOS DE SU ANALISIS**

**MARCO CONCEPTUAL**

Según el diccionario de la real academia de la lengua española establece que repetir es reclamar contra terceros por quien pagó el quebranto que padeció el reclamante.

**ELEMENTOS ESENCIALES**

Insistentemente el Consejo de Estado se ha pronunciado respecto de los elementos que conforman esta acción sintetizándolos así:

1. La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, cuando se haya causado una condena u obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto.
2. La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.
3. El pago realizado por parte de la Administración

La calificación de la conducta del agente como dolosa o gravemente culposa.

Los tres primeros han sido reconocidos por su carácter objetivo. La calificación de la conducta del agente de gravemente culposa o dolosa, es de carácter subjetivo, por lo tanto, se debe analizar con base en la norma vigente en la fecha de presentación de la demanda.

**MARCO JURIDICO.**

La acción de repetición tiene su soporte constitucional en el artículo 90 cuyo tenor literal es el siguiente:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este."

**CULPA GRAVE:** El artículo 6 estipula lo siguiente

Página 24





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes razones:

5. Violación manifiesta o inexcusable de las normas de derecho.
6. Carencia o abuso de competencia para proferir decisión anulada.
7. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativo determinada por error inexcusable.
8. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.

Ley 1437 de 2011

El código contencioso administrativo dispuso en el título III "Medios de Control" la acción de repetición:

Artículo 142 C.C.A. REPETICION: Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.

**OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA**

Según la literal i del artículo 164 de la ley 1437 de 2011 se establece:

"Cuando se pretende repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación y otra forma de terminación de un conflicto, el termino será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar dese el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este código"

**INFORME SOBRE EL ASUNTO A TRATAR**

Como quiera que se trata de un proceso del que apenas tengo conocimiento, y cuya única información se proporciona en razón de las sentencias de primera y segunda instancia, informo que en el acápite de condena en costas el Honorable Consejo de Estado, preciso lo siguiente: "Como quiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A. modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998" Consideró salvo mejor concepto del comité de conciliación quien es el autorizado para decidir la procedencia del proceso de Repetición, que esta





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

manifestación impediría iniciar cualquier proceso de repetición, ya que el dolo o la culpa, se haría improcedente ante la ausencia de la mala fe o temeridad, que además dentro de lo manifestado en la sentencia,

**DECISIÓN:**

Terminada la exposición del apoderado los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO INICIAR ACCION DE REPETICION** teniendo en cuenta que en el acápite de la condena en costas el Honorable Consejo de Estado, preciso lo siguiente: "Como quiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A. modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998", lo que evidencia la ausencia de dolo o culpa grave de agente o ex agente del estado, que impide iniciar la acción en comento por no configurarse los requisitos exigidos. ✓

**2.8.- ACCION DE REPETICION – LUIS ARCESIO RIVERA CUELLAR.** ✓

<b>RESPONSABLE DE LA FICHA: Martha Cecilia castro Ortiz</b>	
<b>1. PROCESO ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD</b>	
FECHA AUDIENCIA:	Haga clic aquí para escribir una fecha.
AUTORIDAD CONVOCANTE:	<b>SIN AUTORIDAD CONVOCANTE</b>
CONVOCADO:	Por determinar por el Comité
CONVOCANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA
MOTIVO DE LA REPETICIÓN:	SENTENCIA JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO
FECHA EJECUTORIA DE LA DECISIÓN JUDICIAL O ARBITRAL/DEL AUTO APROBATORIO DE LA CONCILIACIÓN/DE TRANSACCIÓN/DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN:	24 DE NOVIEMBRE DE 2014
CAPITAL PAGADO:	\$33.010.650





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

TOTAL INTERESES PAGADOS:	
TOTAL PAGADO POR LA ENTIDAD:	
FECHA DE PAGO TOTAL:	19 de febrero de 2015

**HECHOS**

La menor María Camila Rivera, cursaba el grado preescolar en la Institución educativa Francisco Gómez del municipio de Yaguará

La institución educativa se encontraba en construcción desde el mes de enero de 2006.

El 20 de abril de 2006 en las instalaciones de la Institución educativa, la menor María Camila Rivera sufrió un accidente consistente en el machucón con el portón del colegio, propiciado por un menor compañero de grado, causándole trauma por aplastamiento en el primer dedo de la mano izquierda.

El accidente le genero a la menor secuela de carácter permanente en la falange distal del primer dedo de la mano izquierda.

El incidente se produjo dentro de las instalaciones de la sede educativa y en el horario regular de clases.

Luego de los sucesos, el colegio retiro el portón causante de las lesiones.

Antes y hasta el momento del accidente la menor María Camila era una niña de cinco años de edad, sana.

**PARA EFECTOS DE SU ANALISIS**

**MARCO CONCEPTUAL**

Según el diccionario de la real academia de la lengua española establece que repetir es reclamar contra terceros por quien pagó el quebranto que padeció el reclamante.

**ELEMENTOS ESENCIALES**

Insistentemente el Consejo de Estado se ha pronunciado respecto de los elementos que conforman esta acción sintetizándolos así:

1. La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, cuando se haya causado una condena u obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

2. La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

**3. El pago realizado por parte de la Administración**

La calificación de la conducta del agente como dolosa o gravemente culposa.

Los tres primeros han sido reconocidos por su carácter objetivo. La calificación de la conducta del agente de gravemente culposa o dolosa, es de carácter subjetivo, por lo tanto, se debe analizar con base en la norma vigente en la fecha de presentación de la demanda.

**MARCO JURIDICO.**

La acción de repetición tiene su soporte constitucional en el artículo 90 cuyo tenor literal es el siguiente:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este."

**CULPA GRAVE:** El artículo 6 estipula lo siguiente

La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes razones:

1. Violación manifiesta o inexcusable de las normas de derecho.
2. Carencia o abuso de competencia para proferir decisión anulada.
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativo determinada por error inexcusable.
4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.

Ley 1437 de 2011

El código contencioso administrativo dispuso en el título III "Medios de Control" la acción de repetición:

Artículo 142 C.C.A. REPETICION: Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.

**OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA**

Según la literal i del artículo 164 de la ley 1437 de 2011 se establece:

"Cuando se pretende repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación y otra forma de terminación de un conflicto, el termino será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar dese el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este código"

**INFORME SOBRE EL ASUNTO A TRATAR**

El juzgado quinto administrativo de descongestión del circuito de Neiva, profiere fallo el 23 de octubre de 2014, en el que declara no probada la excepción denominada Inexistencia de Nexó causal planteada por el departamento del Huila, declarar administrativamente y patrimonialmente responsable al Departamento del Huila, por la lesión sufrida por la menor María Camila Rivera, ocurrida el 20 de abril de 2006. Condena al Departamento del Huila a pagar por concepto de perjuicios morales y daño a la salud derivados del daño antijurídico ocasionado a la menor, las siguientes sumas de dinero:

MARIA CAMILA RIVERA TRUJILLO (20 smmlv)	12.320.000
LUIS ARESIO RIVERA CUELLAR (10 SMMLV)	6.160.000
ANA MARIA TRUJILLO RIVAS (10SMMLV)	6.160.000
Por daño moral a la salud (10 SMMLV)	6.160.000

La demanda fue apelada por el doctor Hernando Alvarado, y posteriormente desistida en razón a los diferentes pronunciamientos de los despachos judiciales cuando se ve lesionado un menor en los centros educativos.

Página 29  
Ble





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

Se pagó la suma de \$33.010.650.00

Del análisis de las pruebas, y las condiciones en que sucedieron los hechos, no se vislumbra que ni los educadores, ni el departamento hubiera obrado con dolo o culpa, en razón a que la maestra estaba atenta a un grupo de niños, la vigilancia de todos en este momento se salía de sus manos, especialmente cuando estaban construyendo. Los testimonios que se recaudaron no informan que haya sido por desidia o descuido, o falta de diligencia. Se trataba de un grupo de niños, que mientras la maestra traía a unos niños que se habían salido de su vigilancia, el otro niño cierra una puerta y la niña María Camila sufre el accidente. No se ve tampoco la intención de ninguna de la personas de causar un mal, ello obedeció a un accidente que se escapaba a toda previsibilidad. En este orden y si el Comité no dispone otra cosa, considero que no habría lugar a iniciar acción de repetición.

**DECISIÓN:**

Terminada la exposición del apoderado los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO INICIAR ACCION DE REPETICION** teniendo en cuenta que del análisis de las pruebas, y las condiciones en que sucedieron los hechos, no se vislumbra que ni los educadores, ni el departamento hubiera obrado con dolo o culpa, en razón a que la maestra estaba atenta a un grupo de niños, la vigilancia de todos en este momento se salía de sus manos, especialmente cuando estaban construyendo. Los testimonios que se recaudaron no informan que haya sido por desidia o descuido, o falta de diligencia. Se trataba de un grupo de niños, que mientras la maestra traía a unos niños que se habían salido de su vigilancia, el otro niño cierra una puerta y la niña María Camila sufre el accidente. No se ve tampoco la intención de ninguna de la personas de causar un mal, ello obedeció a un accidente que se escapaba a toda previsibilidad.

**3.- VARIOS.**

**3.1.- RENUNCIA DEL SECRETARIO TECNICO.**

Mediante oficio radicado interno 22625 del 17 de septiembre el Secretario Técnico del Comité presenta RENUNCIA, aduciendo que "en circular 2015SAL0013590 del 16 de septiembre de 2015 expedido por la Secretaria General, acto administrativo que establece obligación a mi cargo de entregar funciones asignadas y asumir las del cargo para el cual fui nombrado, es menester presentar renuncia a la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación."

**DECISIÓN:**

30  
Páma

Handwritten signature





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

Terminada la exposición del apoderado los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO ACEPTAR LA RENUNCIA** a la Secretaria Técnica teniendo en cuenta que, revisada la hoja de vida del abogado FELIPE A. CERQUERA R. se pudo establecer que mediante oficio del 14 de mayo de 2013, fue trasladado al Departamento Administrativo Jurídico, por lo que este funcionario no se encuentra en la obligación de reasumir las funciones en la Secretaria General, toda vez que la necesidad del servicio por la cual fue trasladado persiste en la administración departamental y no se ha superado, por lo que el funcionario de la planta deberá continuar con las funciones de la Secretaria Técnica del Comité y la representación judicial de la entidad en el Departamento Administrativo Jurídico. ✓

**3.2.- LICORSA.** ✓

<b>RESPONSABLE DE LA FICHA: DAVID HUEPE</b>	
<b>1. REFERENCIA</b>	
FECHA AUDIENCIA:	24 de septiembre de 2015
CONVOCANTE:	LICORSA
CONVOCADO:	
CONCILIACIÓN ENTRE ENTIDADES ESTATALES O PARTICULARES:	CONFLICTO CON PARTICULARES
PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD:	DEMANDADO PRINCIPAL
TIPO SOLICITUD ANALIZADA POR EL COMITÉ:	EXTRAJUDICIAL
AUTORIDAD CONVOCANTE:	PROCURADURIA GRAL DE LA NACIÓN
PRINCIPAL MOTIVO DE LA SOLICITUD:	ACTOS ADM.CON FALSA MOTIVACIÓN
CAUSA NO ENLISTADA –OTRAS (En el punto anterior si selecciona OTROS ACTOS ADTIVOS especificar la causa.	
MEDIO DE CONTROL JUDICIAL:	CONTENCIOSA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

VALOR TOTAL DE LAS PRETENSIONES O DE LA CONDENA:	\$14.397.511.200
--	------------------

**HECHOS Y PRETENSIONES**

Los hechos, sucintamente se resumen así: Mediante oficio GC 610-14, del 31 de julio de 2014, LA INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL S.A en adelante LICORSA, solicitó al Departamento del Huila, permiso para la introducción del licor denominado LICORETTO de 23° alcoholímetros y la inscripción del licor destilado denominado 20° alcoholímetros.

Que junto con la petición allegó la correspondiente certificación expedida por el INVIMA que autoriza a la planta de LICORSA para la elaboración, distribución y venta de licores, así como el respectivo registro sanitario INVIMA de los productos LICORETTO de graduación alcoholimetría de 20° y 23° en volumen: INVIMA 2014L-0007122 e INVIMA 2014L 0007170, en su orden.

Por lo anterior, la Secretaría de Hacienda Departamental del Huila, mediante oficio 0692 de fecha 26 de agosto de 2014, requirió a los peticionarios para que presentaran la ficha técnica de cada producto, a los cual estos atendieron oportunamente, conforme a remisión efectuada el día 29 de 2014, según comunicación GC 611-14.

En consecuencia, la Secretaría de Hacienda Departamental, a través de oficio No SH-771 del 16 de septiembre de 2014, negó la solicitud, argumentando que no es posible proceder a inscribir ni entregar la autorización para la producción y venta de los productos denominados Licoretto, a la entidad denominada Industria de Licores Global S.A –Licorsa.

La persona aquí convocante como consecuencia de la negativa de la Secretaría de Hacienda Departamental del Huila, presentó recurso de apelación, por presunta ilegalidad en la decisión.

A lo anterior, el señor Gobernador del Huila desato la alzada, profiriendo la resolución No. 113 de 2015, resolviendo REVOCAR parcialmente el contenido de la comunicación obrante en el oficio SH-771 del 16 de septiembre de 2014, considerando la viabilidad de conceder permiso o autorización para la producción y venta del licor LICORETTO de 20° en el Departamento del Huila, a la Industria de Licores Global S.A LICORSA, en los términos y consideraciones expuestas en la presente providencia.

Así mismo a artículo 2° de la resolución que resolvió el recurso, dispuso que se comunicara a la Fábrica de Licores de Antioquia, suscriptora del contrato 487 de 2014, cuyo objeto es la producción, distribución y venta del aguardiente doble anís en el territorio del Departamento del Huila, para que si considera pertinente intervenga en la actuación.

La parte convocante resalta que la resolución No. 113 de 2015, tiene dos aspectos fundamentales i) confirma los argumentos esgrimidos por la Secretaria de Hacienda Departamental. ii) que no obstante lo anterior revoca parcialmente el acto emitido por la Secretaria de Hacienda autorizando la inscripción del licor licoreto de graduación alcoholimétrica de 20° en volumen, pero

32

*[Firma]*





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

condicionando a la elaboración de un estudio de mercado, el cual es un requisito no previsto en la ley. La autorización de inscripción de Licoretto 20 ° grados, es dada en conveniencia y no en legalidad, al igual que la negativa de introducción del Licoretto de 23°, que fue dada en conveniencia y no en legalidad, ordenando "comunicar la decisión a la Fábrica de Licores de Antioquia, que carece de personería jurídica y es un extraño en la petición formulada por LICORSA.

Que la negativa del Departamento del Huila de permitir la introducción LICORETTO de 23° y la inscripción de LICORETTO de 20°, en los términos previstos por la ley, ha causado perjuicios económicos a LICORSA, producto de la no puesta en funcionamiento de la planta, y la pérdida de oportunidad en la obtención de utilidades.

**PROPUESTA CONCILIATORIA DE LA CONVOCANTE:**

PRIMERA: Que se deje sin efectos el acto administrativo contenido en el oficio SH- 771 del 16 de septiembre de 2014, por la cual la Secretaría de Hacienda negó la inscripción del licor LICORETTO en graduación alcoholimétrica de 20° de volumen, y negó el permiso para la introducción del licor LICORETTO en graduación alcoholimétrica de 23° de volumen.

SEGUNDA: Que se deje sin efectos el acto administrativo contenido en la resolución No. 113 de 2015"por la cual se resuelve un recurso de apelación" en el sentido que negó el permiso para la introducción del licor LICORETTO en graduación alcoholimétrica de 23° de volumen.

TERCERA: Que se deje sin efectos el acto administrativo contenido en la resolución No. 113 de 2015"por la cual se resuelve un recurso de apelación" en el sentido que ordenó la realización de un estudio de mercado para la inscripción del licor LICORETTO en graduación alcoholimétrica de 20° de volumen, a pesar de haber autorizado la misma y sin ser un requisito legal.

CUARTA: Como consecuencia de lo anterior, se realicen las siguientes reparaciones:

1. Se inscriba como producto no sometido a monopolio rentístico el licor LICORETTO en graduación alcoholimétrica de 20° de volumen.
2. Se autorice la introducción del licor LICORETTO en graduación alcoholimétrica de 23° de volumen, el cual si está sometido a monopolio rentístico y del cual LICORSA cumple con todos los requisitos legales.
3. Indemnicen los perjuicios ocasionados a LICORSA S.A por la negación ilegal para la introducción del licor LICORETTO en graduación alcoholimétrica de 23° de volumen y la inscripción del licor de LICORETTO en graduación alcoholimétrica de 20° de volumen. Perjuicio que asciende a la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS (10.797.511.200.00 suma esta que corresponde al lucro cesante producto de la pérdida de oportunidad de recibir la utilidad esperada por la venta del licor LICORETTO en el Departamento del Huila. Y a la suma de TRES MIL SEICIENTOS MILLONES DE PESOS (3.600.000.000.00) que corresponde al stand by de la fábrica y su correspondiente depreciación por la no puesta en funcionamiento.

33  
Págs

*[Firma]*





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

**ANÁLISIS DE DAVID HUEPE**

El sustento jurídico del monopolio rentístico para el caso de licores emana de la Constitución y desde luego desarrollado en la ley, u ordenanza respectiva; siendo vedado para los particulares ejercer libremente esta actividad productiva o comercial, la cual recae exclusivamente en cabeza del Estado, quien es el ente regulador para ejercer discrecionalmente esta actividad y en los términos de conveniencia que permitan circunstancias favorables para el Departamento del Huila, cosa que en el presente caso conduce a la inviabilidad para acceder a la solicitud de autorización de la producción y venta del licor Licoreteto, máxime que esa discrecionalidad monopolística es la que le permite al Departamento custodiar la frontera comercial frente a esta actividad; además atendiendo que hay en curso la concesión del aguardiente Doble Anís, al cual no se le debe imponer intempestivamente competencia comercial, so pretexto de atender a plenitud el instituto de la libre competencia económica, que es precisamente la excepción restrictiva que permite la figura jurídica del monopolio de licores.

En ese sentido el Departamento del Huila al fundamentar la resolución No. 113 de 2015, advierte que por el hecho que LICORSA sea poseedor de una marca de licores, con los registros sanitarios expedidos por el INVIMA, ello no constituye para que de facto el interesado o particular a su arbitrio quede facultado para producir y vender determinado producto en una jurisdicción territorial, para desconocer las potestades monopolísticas que tiene el Departamento del Huila para negar las pretensiones de la convocante, ente territorial que está facultado Constitucional y legalmente para restringir la producción y venta del producto Licoreto en su jurisdicción.

Ahora, las inconformidades de la convocante se centran al señalar que, la autorización que dio el Departamento del Huila, para la inscripción de Licoretto 20 ° grados, es dada en conveniencia y no en legalidad, al igual que la negativa de introducción del Licoretto de 23°, que fue dada en conveniencia y no en legalidad, ordenando "comunicar la decisión a la Fábrica de Licores de Antioquia, que carece de personería jurídica y es un extraño en la petición formulada por LICORSA; no tiene asidero por lo siguiente

Al respecto, ha de advertirse que el Departamento del Huila no ha dado autorización alguna para la producción y venta de licor LICORETO de 20°, cosa distinta, considera es una viabilidad para la autorización, condicionada a un estudio que soporte el impacto económico como consecuencia de la autorización que se pretende, precaviendo que el Departamento del Huila al tener vigente un contrato con el Departamento de Antioquia para la producción del aguardiente Doble Anís, no hace otra cosa que proteger la frontera comercial del Departamento, toda vez improvisadamente no es de presentación fomentarle competencia a su mismo producto insignia, cual es el Aguardiente Doble Anís, desprovisto de un estudio económico que puede conducir a la inviabilidad o viabilidad de la autorización, como insumo imperioso que constituye el soporte vertebral para sopesar eventuales perjuicios frente al concesionario del producto Aguardiente Doble Anís, por lo que





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

entonces bajo esta reserva que inspira el ejercicio monopolístico sobre licores, condujo al despacho del señor Gobernador del Huila para considera que en principio resulta viable acceder al permiso o autorización para la producción y venta de licor LICORETO en los grados alcoholímetros de 20 a 23°.

Por lo anterior, no resulta ilegal la decisión que tomo el Departamento del Huila, para condicionar la autorización condicionanda a la elaboración de un estudio de mercado, el cual si bien es cierto no es un requisito previsto en la ley, sin embargo la discrecionalidad monopolística que ostenta el Departamento del Huila, lo autoriza para blindar la frontera comercial del Departamento del Huila, y por ello resulta conducente y pertinente la decisión adoptada en la resolución No. 013 de 2015,

Finalmente, ha de advertirse que frente a las pretensiones que expone la convocante, denota a las claras que la actividad que pretendía con la autorización para la producción y venta de licor LICORETO en los grados alcoholímetros de 20 a 23°.le resultaba muy rentable, lo cual lleva a concluir que constituía abiertamente una clara competencia para las finanzas del Huila y frente al aguardiente doble anís.

**RECOMENDACIÓN.**

El suscrito apoderado considera no resulta conciliable las pretensiones de la convocante, conforme a la parte motiva expuesta.

**DECISIÓN:**

Terminada la exposición del apoderado los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO CONCILIAR** teniendo en cuenta que, no resulta ilegal la decisión que tomo el Departamento del Huila, para condicionar la autorización a la elaboración de un estudio de mercado, el cual si bien es cierto no es un requisito previsto en la ley, se adopta en virtud de la discrecionalidad monopolística que ostenta el Departamento del Huila, que lo autoriza para blindar la frontera comercial dentro del Departamento del Huila, y por ello resulta conducente y pertinente la decisión adoptada en la resolución No. 013 de 2015.

Además debe advertirse que, el Departamento del Huila no ha dado autorización alguna para la producción y venta de licor LICORETO de 20°, cosa distinta, considera es una viabilidad para la autorización, condicionada a un estudio que soporte el impacto económico como consecuencia de la autorización que se pretende, precaviendo que el Departamento del Huila al tener vigente un contrato con el Departamento de Antioquia para la producción del aguardiente Doble Anís, no hace otra cosa que proteger la frontera comercial del Departamento, toda vez improvisadamente no es de presentación fomentarle competencia a su mismo producto insignia, cual es el Aguardiente Doble Anís, desprovisto de un estudio económico que puede conducir a la inviabilidad o viabilidad





**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila**

**Acta de Comité Sesión Ordinaria No. 017 de 2015**

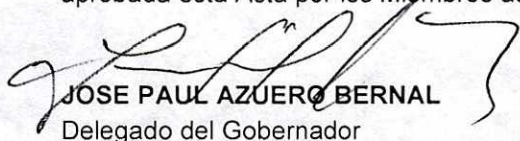
de la autorización, como insumo imperioso que constituye el soporte vertebral para sopesar eventuales perjuicios frente al concesionario del producto Aguardiente Doble Anís, por lo que entonces bajo esta reserva que inspira el ejercicio monopolístico sobre licores.

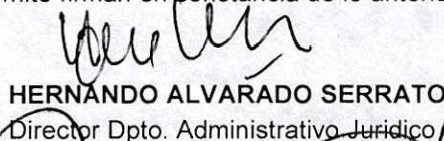
**ARGUMENTOS COMITÉ:**

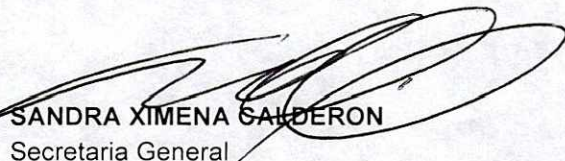
NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto NO, "POR NO EXISTIR OBLIGACION DE RECONOCERLE EL DERECHO." Y " POR LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SE ENCUENTRA AJUSTADO A DERECHO.

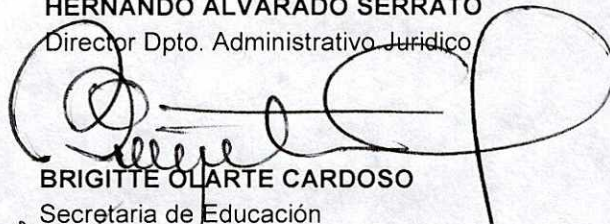
**TERMINACION DE LA SESION:**

Agotado el orden del día se termina la sesión siendo las 5:30 p.m. del mismo día, y una vez leída y aprobada esta Acta por los Miembros asistentes del Comité firman en constancia de lo anterior.

  
**JOSE PAUL AZUERO BERNAL**  
Delegado del Gobernador

  
**HERNANDO ALVARADO SERRATO**  
Director Dpto. Administrativo Jurídico

  
**SANDRA XIMENA CALDERON**  
Secretaria General

  
**BRIGITTE OLARTE CARDOSO**  
Secretaria de Educación

(AUSENTE)  
**LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR**  
Secretario de Hacienda

  
**MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO**  
Jefe Control Interno de Gestión

  
**FELIPE ANDRES BERQUERA RIVERA**  
Secretario Técnico